

### **Antecedentes en el INE**

En diciembre de 2020, el INE aprobó una nueva 3 de 3, que no tenía que ver con transparencia de bienes y conflictos de interés sino con la protección de los mujeres y que tenía su origen en las luchas y demandas de grupos organizados de mujeres de la sociedad civil. La llamada declaración 3 de 3 contra la violencia obligó a los candidatos a cargos federales en los comicios de 2021 a declarar bajo protesta de decir verdad cumplir en tres áreas: no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y en tercer lugar, no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

Los lineamientos y formatos aprobados por el INE y aplicados en 2021 son origen y antecedente de la reforma.

### **Experiencia 2021 en Chiapas**

Ya en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas se realizó el Reglamento para el registro de candidaturas para los cargos de Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamiento, en el Proceso Electoral Local Ordinario y en su caso extraordinario 2021.

El reglamento emitido para el PELO 2021, regula los actos previos y demás consideraciones relacionadas con el registro de candidaturas: reelección, convenios

de coalición, acuerdos de candidatura común, plataformas electorales, cuotas, así como el uso e implementación del Sistema Estatal de Registro de Candidaturas. Este sistema informático desarrollado por el IEPC, ha sido de gran ayuda para agilizar y eficientar el registro de candidaturas con muy buena aceptación por parte de los partidos políticos y mejoras continuas de uno a otro proceso.

Además, en el artículo 7 del mismo reglamento, se obliga a los partidos políticos a presentar durante la etapa de registro de candidaturas, el formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad firmado por las y los aspirantes a alguna candidatura, bajo el precepto de ser el instrumento denominado 3 de 3 contra la violencia donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:

- I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
- II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
- III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en el registro de deudores alimentarios del Estado de Chiapas regulado en el Código Civil del Estado de Chiapas.

De igual manera, prevé que para tal efecto, los partidos políticos, deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, que sus candidatos no se encuentran en ninguno de los tres supuestos citados, lo que también aplica para candidatos independientes.

Esta incorporación como requisito de los tres elementos principales de la 3 de 3, aunque en aquel entonces no había sido aprobada a nivel federal, se adoptó como medida afirmativa buscando abonar decididamente a la prevención y erradicación

de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, pero además suponía poner a prueba la aceptación de partidos, candidaturas y autoridades ante la acción por parte del instituto en uso de sus facultades reglamentarias.

Afortunadamente, la medida se sostuvo contando con el aval de todos los partidos, y todas las candidaturas debieron presentarlo.

El Sistema Estatal de Registro de Candidaturas, es una herramienta informática a través del cual los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independiente, realizaron aproximadamente 11801 solicitudes de registros y su correspondiente carga de la documentación que acreditaba el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Dicho sistema, fue consensado a partir de la buena disposición de los Partidos Políticos que advirtieron los beneficios de su aplicación sobre todo en el marco de la pandemia generada por el virus Sars-COV-COVID-19, teniendo sustento normativo en el artículo 33 del reglamento de registro de candidaturas aprobado mediante acuerdo IEPC/CG-A/050/2022 y que permite entre otras cosas la solicitud de registros, revisión, pre validación, así como la generación de las listas de solicitudes de registros de candidaturas.

Para poder llevar a cabo esta verificación, el IEPC firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Chiapas.

Dicho convenio se celebró en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021, por el entonces Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas y el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios. El instrumento consideraba la colaboración, coordinación y apoyo institucional para garantizar el intercambio de información de personas sancionadas por violencia familiar, doméstica y deudores de pensión alimentaria, que aspiren a ser candidatas o candidatos a cargos de elección popular durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. En el acto, fungieron como testigos de honor la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

(TEECH), Sofía Ruiz Olvera y la Diputada Janette Ovando Reazola, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.

Este convenio, que era el primero en su tipo en firmarse en el país, tenía por objetivo garantizar el cumplimiento de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género denominada 3 de 3 contra la violencia, así como propiciar el intercambio de información sensible que deba ser registrada en el Sistema Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) de forma oportuna y eficaz, con la finalidad de agilizar y optimizar el proceso de entrega y recepción de dicha información.

Es decir por una parte se tenía la declaración 3 de 3 aprobada por el INE y el IEPC y por otra faltaban los elementos para materializarla y éste convenio constituía una herramienta para ello.

Si bien la responsabilidad de postular personas sin señalamientos de violencia es de los partidos políticos y así se insistió en los mensajes desde la firma de este convenio, lo novedoso era que quienes no estaban al corriente en sus pagos y entrega de pensiones alimentarias no podrían postularse. Esto sería posible únicamente con la información en manos del Poder Judicial y que mediante este instrumento se facilitaría.

¿Qué pasa con las responsabilidades de los partidos políticos y de los candidatos? Si bien se insistió en que no era válido trasladar esta responsabilidad hacia las autoridades electorales, se vislumbraba entonces que lo que hizo necesarios los lineamientos y posteriores reformas constituciones, es decir la falta de responsabilidad en las postulaciones, iba a buscar prevalecer.

Desde aquel momento, el IEPC y el Tribunal coincidieron en destacar que no es responsabilidad de ellos que las y los posibles candidatos tengan antecedentes; sino que es una obligación de los partidos políticos confirmar que sus aspirantes cumplan con todos los requisitos de elegibilidad. “Este es el espíritu de este convenio, cuando los partidos quieran saber cuál candidato o candidata tiene

antecedentes penales, pueden acudir al Instituto de Elecciones, y a través del PJE, tendrán toda la información fidedigna sobre el estado jurídico en el que se encuentran las y los pretendientes a una posición de elección”, señaló el magistrado presidente Trinidad Palacios.

En el mismo evento y en representación del poder ejecutivo, la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores reiteró que “mientras existan mujeres que sufran discriminación o violencia, que sean excluidas del quehacer público, que carezcan al acceso a la salud, a la educación, todas las instituciones públicas estamos obligadas a trabajar para erradicar esa situación. Estamos seguros de la colaboración efectiva entre el IEPC y el PJE para cubrir, en el presente proceso electoral y en el futuro, la iniciativa tres de tres contra la violencia, con ello habrá seguridad de que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con antecedentes de denuncias”, precisó.

Con el apoyo explícito del poder ejecutivo y judicial, las acciones implementadas por el IEPC debían de rendir frutos y sobretodo, reflejarse en futuras medidas que atajen y sancionen los intentos por violentar a las mujeres.

Bajo este precepto, en el acuerdo de aprobación del registro de candidaturas del PELO 2021, se obtuvo un cruce de información con el Poder Judicial y se vio instrumentado en el acuerdo de aprobación listas de candidaturas del PELO 2021 mediante acuerdo IEPC/CG-A/159/2021, de fecha 13 de abril del 2021:

### DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.

El pasado 8 de marzo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Poder Judicial del Estado de Chiapas, celebraron convenio de colaboración, coordinación y apoyo institucional celebrado; a efecto de dar cumplimiento a los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política en Razón de Género denominada 3 de 3 contra la violencia.

En ese sentido el 01 de abril de 2021, mediante oficio IEPC.SE.DEAP.385.2021, dirigido al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, maestro Juan Óscar Trinidad Palacios; la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, solicitó el cruce de la base de datos de las personas sancionadas por violencia familiar, violencia doméstica y deudores de pensión alimenticia, a que hace referencia la cláusula tercera inciso c) del convenio antes citado, contra la base de datos de solicitudes de candidaturas con clave de elector (remitida por la DEAP), solicitando se informara a esta autoridad el listado de las personas que, habiendo solicitado el registro de candidaturas, se ubiquen en dicha hipótesis.

Atento a lo anterior, el pasado 06 de abril de 2021, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, remitió el resultado del cruce de información solicitado, del que destaca los siguientes resultados:

PARTIDO	Ayuntamientos	Diputaciones RP	Diputaciones MR	HOMBRES	MUJERES
INDEPENDIENTES	1	N/A	0	1	0
VA POR CHIAPAS	0	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0	0
PRI	1	1	0	2	0

MOVIMIENTO CIUDADANO	0	1	0	1	0
NUEVA ALIANZA CHIAPAS	0	0	1	1	0
DEL TRABAJO	1	0	0	1	0
ENCUENTRO SOLIDARIO	0	3	3	6	0
MORENA	2	0	0	2	0
POPULAR CHIAPANECO	0	0	0	0	0
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	3	0	3	6	0
PODEMOS MOVER A CHIAPAS	4	0	0	4	0
REDES SOCIALES PROGRESISTAS	2	0	0	2	0
SUMA	14	5	7	26	0

Así por primera vez se tuvieron datos concretos que permitieron identificar casos que se encontraban en esos supuestos. Si bien finalmente no fueron sancionados con la pérdida del derecho al registro debido a que no se acreditó la falta dado que liquidaron sus cuentas pendientes antes del periodo, la medida dejó de manifiesto la eficacia de la acción al condicionar un interés político al cumplimiento de sus obligaciones con sus hijos e hijas, aunque por otro lado revela la urgencia de mecanismos que garanticen que una vez concluida la elección, la violencia no regrese y busque nuevas formas de dar la vuelta a las acciones.

## **Reforma Constitucional**

El pasado 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma conocida como Ley 3 de 3 contra la violencia , con la cual se impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género ser postulados a un cargos de elección popular y también ocupar un cargo en el sector público.

La reforma modificó los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La “Ley 3 de 3” contra la violencia aprobada establece que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno, ya sea a nivel federal, estatal y municipal, ni ser postulado a un cargo de elección popular.

Esta aprobación se suma y tiene sus antecedentes inmediatos como ya vimos en lo que se aplica en Chiapas y otros estados del país, con sus particularidades locales en las normas que cada entidad ha aprobado o implementado como acciones afirmativas.

La Reforma Constitucional consiste en modificaciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución, con el fin de suspender los derechos políticos de las personas acosadoras sexuales, agresores familiares y deudoras de pensión alimenticia.

Según la reforma mencionada, estos derechos políticos de los ciudadanos pueden suspenderse por las siguientes causas:

- Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
- Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual.

- Por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual.
- Por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
- Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Además de que la persona no pueda ser candidata para cargos de elección popular, en estos supuestos, la persona tampoco puede ocupar un cargo público.

La reforma entró en vigor el pasado 30 de mayo de 2023, lo que daba a las legislaturas estatales y al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para modificar sus constituciones y demás legislación a fin de armonizarlas.

Al tratarse de una reforma que impacta a toda la administración pública exige las medidas y modificaciones pertinentes a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para garantizar que no haya agresores ocupando cargos públicos.

La declaratoria de la constitucionalidad de la reforma por parte del Congreso de la Unión se realizó al cumplirse la aprobación de 23 legislaturas locales, más de las 17 que se requerían para la reforma.

A pesar de los muchos llamados de las asociaciones civiles y grupos de mujeres organizados, y de los antecedentes en Chiapas sobre la violencia política y la usurpación de candidaturas, el estado no estuvo entre los primeros 17 en ratificarla y hacer posible la constitucionalidad de la 3 de 3. Los primeros 17 estados en hacerlo y cumplir así su constitucionalidad fueron:

1. Tamaulipas
2. Estado de México
3. Quintana Roo
4. Ciudad de México
5. Sinaloa
6. Baja California



7. Veracruz
8. Tabasco
9. Colima
10. Coahuila
11. Tlaxcala
12. Morelos
13. Baja California Sur
14. Chihuahua
15. Yucatán
16. Durango
17. Zacatecas

### **La reforma local**

El 06 de septiembre del 2023, la 68 legislatura del Estado de Chiapas aprobó en sesión extraordinaria la reforma a nivel local. Esto consistió en la modificación del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, añadiendo la fracción VI, respecto a la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público. La reforma establece en tres párrafos los siguientes supuestos:

**Artículo 23. Los derechos derivados...**

I. a la V. ...

VI. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada, delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. ...

Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El texto constitucional es muy claro al establecer que tiene que ser por sentencia firme de algún delito, por ser persona deudora alimentaria morosa, imponiendo a norma constitucional la imposibilidad de registro, designación o comisión en el servicio público.

El Congreso del Estado aprobó también una enmienda a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Igualdad para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Con ello busca sancionar la violencia digital y mediática y contar con mayores recursos para combatir todo tipo de violencia hacia las mujeres desde las facultades del ejecutivo.

Unos días antes de la aprobación el Observatorio para la Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres había integrado un grupo de trabajo para dar seguimiento a la armonización pendiente en el Congreso del Estado, con la diputada presidenta de la Comisión de Género en el legislativo, encabezando dicho grupo. La iniciativa surgió luego de constantes peticiones, exigencias y solicitudes por parte de las instancias que integran el observatorio y la participación activa de los grupos de la sociedad civil así como la visita y gestión de la activista Indira Sandoval, impulsora de la 3 de 3 nacional.

Al aprobarlo el pasado 6 de septiembre, la reforma será aplicable para las elecciones de 2024.

En Chiapas el proceso electoral inicia en enero del año de la elección por lo que el Congreso del Estado estaba a unas semanas de concluir el periodo en que podría realizar dicha reforma.